

deben guardarse á este Tribunal Supremo de Justicia. Tercero: lígase á las partes por conducto del Tribunal de Circuito de Guadalajara, remitiéndole copia certificada de este auto, y archívense á su vez estas diligencias.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—Por el C. secretario, *Manuel Fernandez Villareal*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, 12 de Agosto de 1873. Por el C. secretario, *Manuel Fernandez Villareal*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juegado 2º de Distrito de México por D. Refugio Gutierrez, contra el Ayuntamiento de Tacubaya que le impone una multa de veinticinco pesos, por haber sembrado en los terrenos del rancho de Nápoles.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. Refugio José Gutierrez contra una determinación del ayuntamiento de Tacubaya, imponiéndole una multa de veinticinco pesos por haber sembrado en los terrenos del rancho de Nápoles que fueron destinados para la formación de una colonia por su anterior dueño, D. Enrique Beale, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prescrita por la ley, dice: Que la justificación de vd. se ha de servir declarar en definitiva, que la justicia federal lampara

y protege al expresado C. Refugio Gutierrez, contra la determinación de que se queja, porque con ella se violan especialmente en su persona, las garantías individuales que otorga el art. 16 de la Constitución, en virtud de que tal acto importa un ataque al derecho de propiedad del mencionado ciudadano sobre los terrenos de que se le prohíbe usar, por las razones que para brevemente á manifestar. La razón en que se apoya consiste, en que los terrenos sembrados por el quejoso, estando destinados para el uso público de tránsito, como calles de la colonia que se proyectó establecer en ellos, en virtud de la concesión que para ese objeto obtuvo el finado D. Enrique Beale del Supremo Gobierno, no han podido aprovecharse en beneficio propio de Gutierrez exclusivamente, sin incurrir en la pena que le ha impuesto esa corporación, usando de las facultades que la ley le concede; mas como de las pruebas que se han rendido por el que suscribe resulta, que la mencionada colonia no ha llegado á establecerse, quedando el terreno en el mismo estado que antes tenía como propio para la labranza; y por otra parte, según manifiesta la comunicación del C. Presidente del Ayuntamiento de México que obra en autos, la hacienda de San Borja y sus pertenencias, entre las cuales está comprendido el repetido rancho de Nápoles, corresponden á la Municipalidad de ese pueblo, es claro, que aun bajo este aspecto el Ayuntamiento de Tacubaya no tiene jurisdicción sobre los vecinos de otra Municipalidad, y por consiguiente, al imponerle la pena de que se queja el C. Gutierrez, ha violado en su persona las garantías que otorga el art. 16 de la Constitución, tanto porque se le priva el uso libre de su propiedad, cuanto porque esta se encuentra ubicada fuera de sus límites hasta donde alcanza su jurisdicción. Por estas consideraciones, que se desprenden naturalmente de las diversas constancias de autos, concluye el que suscribe reproduciendo la petición que tiene hecha al principio, sobre que es

de otorgársele al referido C. Refugio José Gutierrez el amparo que solicita, por ser conforme á justicia.

México, Mayo 3 de 1873.—*Francisco G. Motezuma.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Mayo 31 de 1873. Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Refugio Gutierrez, en virtud de reputar violadas en su persona, con el acuerdo del Ayuntamiento de Tacubaya, dictado con fecha 2 de Diciembre último, las garantías individuales que otorga la Constitución en sus artículos 16, 21 y 27; visto el informe de la autoridad infractora; lo pedido por la parte fiscal; las pruebas rendidas y demas que verse convino.

Considerando primero: En cuanto á la infraccion que se dice por el quejoso cometida de los artículos 21 y 27, que ni de uno ni de otro se ha verificado violacion alguna; del primero, porque determinándose por la Constitución que la autoridad política ó administrativa no exeda en la imposicion de multas de la cantidad de quinientos pesos, al imponerse al quejoso por el Ayuntamiento de Tacubaya la de veinticinco pesos, no se ha infringido el artículo 21; y en cuanto al segundo, porque en ningun sentido legal puede llamarse expropiacion la imposicion de una multa, y menos para el efecto de calificarla como violacion de una garantía.

Considerando segundo: Que respecto al artículo 16 que tambien se invoca como violado, hay que tener presentes los términos que usa la Constitución, así como el espíritu y objeto preventivo de ese artículo, el que á no dudar, es el de que las autoridades al determinar en cualquier sentido en objetos de su ramo ó atribuciones, no sea invadiendo la jurisdiccion ó competencia de otra autoridad, cuando por las leyes no está comprendido el caso en los que deben resolverse por el juicio de competencia: que el

TOMO IV.—PARTE II.

Ayuntamiento de Tacubaya al imponer al quejoso la multa mencionada, lo hizo con referencia ó por causa de los terrenos pertenecientes al rancho de Nápoles, los que se ha probado son de la municipalidad de Mixcoac, y por consiguiente, la multa en el caso ha sido impuesta por autoridad no competente, segun el sentido del repetido artículo 16, y redundando en consecuencia en violacion de una garantía individual.

Por tales consideraciones pues, se declara: Primero: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Refugio Gutierrez, en cuanto á la violacion que pretende haberse efectuado en su persona con el acuerdo de 2 de Octubre último, de las garantías que otorgan los artículos 21, y 27. Segundo: la Justicia de la Union si ampara y protege al expresado quejoso, en cuanto al artículo 16 que tambien invoca, por haberse violado en el caso con el dicho acuerdo del Ayuntamiento de Tacubaya. Hágase saber; remítase copia de este fallo al Diario Oficial y Semanario Judicial de la Federacion, y elévense los autos previa citacion fiscal á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. Juez segundo de Distrito, Lic. José María Canalizo: doy fé.—*José María Canalizo.*—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Es copia. México, Junio 7 de 1873.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Junio 28 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Refugio Gutierrez ante el juzgado 2º de Distrito de esta Ciudad, contra el Ayuntamiento de Tacubaya, que por acuerdo de 2 de Diciembre último impuso al quejoso una multa de \$ 25, por haber dispuesto arbitrariamente de algunos terrenos y calles en el rancho de Nápoles, con cuyo acto crea Gu-

tierras vulneradas en su persona las garantías á que se refieren los artículos 16, 21 y 27 de la Constitución federal; y considerando, respecto de las garantías á que aluden los artículos 21 y 27: que la imposición de una multa como la de que se trata, no importa violación de esas garantías; considerando, respecto de la del artículo 16: que en el expediente aparece, que los terrenos y calles del rancho de Nápoles de que ha dispuesto Gutiérrez, no están sujetos á la vigilancia de policía que debe tener el municipio de Tacubaya, sino que están dentro del municipio de Mixcoac; de lo que resulta, que el Ayuntamiento de Tacubaya no ha tenido competente autoridad para imponer la multa á Gutiérrez, y por lo mismo, que imponiéndosela como se la impuso, ha atacado la garantía á que el artículo citado se refiere; de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 31 del mes próximo pasado por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad, que declara, en primer lugar: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Refugio Gutiérrez en cuanto á la violación que pretende haberse efectuado en su persona, con el acuerdo de 2 de Diciembre último, de las garantías que otorgan los artículos 21 y 27; y en segundo lugar, que ampara y protege al expresado quejoso, en cuanto al artículo 16 que también invoca, por haberse violado en el caso con el dicho acuerdo del Ayuntamiento de Tacubaya.—Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias. Pedro Ogazón.—J. M. Lozano.—P. Ortaiz.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Cas-*

tañeda y Ndjara.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Azaú.—S. Guzmán.—José García Ramírez.—Luis Aguilar, secretario.

Es copia. México, Julio 29 de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por José Mauricio, contra su consignación al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR TISCALI.

Ciudadano Juez de Distrito:

El promotor fiscal alegando para definitiva, dice: Que José Mauricio ha solicitado amparo de la justicia federal, en virtud de haberlo consignado contra su voluntad al quinto batallón de línea, el ciudadano jefe político de Villa Álvarez, cuyo acto creo que vulnera en su persona la garantía que otorga el artículo quinto de la Constitución general del país, y funda su queja en la fracción primera del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869. La autoridad ejecutora informa, que en efecto consignó al quejoso al expresado quinto batallón, autorizado por el ciudadano gobernador del Estado, y por ser desertor del primer batallón, guardia nacional del mismo.

De lo actuado resulta, que el peticionario es casado, tiene dos hijos menores y es honrado y trabajador.

No cabe duda, ciudadano juez, en que cuando José Mauricio fué consignado al servicio de las armas, estaba en vigor la ley de 2 de Diciembre de 1871, cuyo artículo primero declaró vigente, entre otros, el segundo de la ley de 17 de Enero de 1870. El tenor literal de este último, es terminante, claro y expreso: "La primera parte del artículo quinto, sección primera, título primero de la constitución, quedará en estos tér-